

85

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCION SEGUNA

Bogotá, D.C., 12 OCT 2018

PROCESO: 110013331-021-2018-00153-00
DEMANDANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
- COLPENSIONES
DEMANDADO: MAGDALENA MORERA REBOLLEDO

Entra al Despacho el MEDIO DE CONTROL DE LESIVIDAD, instaurado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en contra de la señora MAGDALENA MORERA REBOLLEDO, para resolver la medida cautelar presentada por la parte actora.

I.- MEDIDA CAUTELAR DE LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO.

El apoderado Judicial de la parte actora – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, presenta MEDIDA CAUTELAR (fls. 7 al 23) de suspensión provisional de los efectos de la Resolución VPB32655 del 17 de agosto de 2016 y de la Resolución Nª SUB31002 del 5 de abril de 2017, mediante las cuales, se procedió a reliquidar la pensión en cuantía de \$4.143.320 para el 2016 e ingresar en nómina una pensión de vejez a favor de la señora MORERA REBOLLEDO MAGDALENA, sin tener en cuenta los certificados de información laboral

86

allegados por la GOBERNACION DEL HUILA, a través del oficio N° 81015054 del 22 de noviembre de 2016.

Lo anterior debido a que para el reconocimiento de la prestación, se incluyó de forma errada el tiempo comprendido entre el 23 de julio de 1980 al 30 de julio de 1995, como quiera que este tiempo comprende hasta el 15 de octubre de 1981, tal y como se evidencia en el formato CLEBP N° 1 (vinculación laboral) y N° 3 (Certificación de Salarios mes a mes), con fecha de emisión 21 de noviembre de 2016.

La anterior solicitud tiene como fundamento el artículo 229 y 230 del C.P.A.C.A., determinando que la demandada no tiene derecho a la reliquidación en la forma en que fue ordenada.

II. DEL TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR:

Mediante auto de fecha 4 de mayo de 2018 (fls. 26 al 27), se ordenó correr traslado a la señora MORERA REBOLLEDO MAGDALENA, por el término de cinco (5) días, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., y S.S., notificación que fue remitida por el Despacho a través de la oficina de apoyo judicial con los anexos para la contestación correspondiente, sin embargo no pudo ser realizada dicha notificación, por lo que a través de auto de fecha 7 de septiembre de 2018 (fls. 58 al 59), se ordenó a la entidad agotar la notificación en los términos establecidos en los artículos 200 del C.P.A.C.A., y los artículos 291, 292 y 293.

Finalmente la notificación de la medida cautelar fue efectuada el día 1 de octubre de 2018 (fol. 80), a la apoderada judicial de la parte actora, quien mediante escrito de fecha 8 de octubre de 2018 (fls. 82 al 83), procede a descorrer el traslado ordenado, donde indica lo siguiente:

En primer lugar afirma que la parte actora depreca la medida de suspensión provisional, sin realizar un señalamiento correcto de las

normas que considera vulneradas por los actos administrativos, es decir, solo indicó las normas que rigen las medidas cautelares y, a explicar su finalidad, pero no se detuvo a explicar las razones por las cuales se imponía decretar la suspensión provisional.

De la misma forma, indica que el no existe probanza de los perjuicios tal y como lo establece el artículo 231 del C.P.A.C.A., por lo que la medida cautelar no puede prosperar por carencia de soporte.

Aduce que el principio de sostenibilidad fiscal no sirve de escudo para menoscabar los derechos fundamentales de las partes y, que para el presente caso, la pensión de la demandante adquiere la calidad de derecho fundamental, máxime cuando en los hechos de la demanda se indica que el derecho pensional fue reconocido por vía de tutela, por lo que no es viable entrar a conceder una medida provisional, por expresa prohibición constitucional, ya que la sostenibilidad fiscal no es un argumento plausible y mucho menos constitucional para suspender el derecho pensional de la actora.

Solicita al Despacho tener en cuenta los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado en el pronunciamiento de fecha 22 de agosto de 2017, dentro del radicado 76001-23-33-000-2013-00543-01 (4156-2016), donde se resolvió un caso similar al aquí planteado.

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

El artículo 230 del C.P.A.C.A., las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A, la cual, se refiere a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Sin embargo, para la adopción de dicha medida, se

requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma *ibídem*, el cual a la letra dice:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares.

*Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas** en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.*

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (subrayado fuera de texto)

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos: (...)

Planteado lo anterior, se tiene, que el C.P.A.C.A. en el numeral 3 del artículo 230 contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, la que se encuentra condicionada a que el acto acusado contraría de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, pues al requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte sentencia.¹

Bajo los presupuestos enunciados con anterioridad, se absolverá la medida cautelar deprecada por la parte actora.

La solicitud de medida de suspensión provisional presentada tiene sustento que con la expedición de la Resolución VPB32655 del 17 de agosto de 2016 y de la Resolución Nª SUB31002 del 5 de abril de 2017, mediante las cuales se procedió a reliquidar la pensión en cuantía de \$4.143.320 para el año 2016 e ingresar en nómina una pensión de vejez a

¹ C.E. , Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alir Eduardo Hernandez Enriquez

favor de la señora MORERA REBOLLEDO MAGDALENA, se desconoció el tiempo certificado y aportado por la GOBERNACION DEL HUILA, a través del oficio N° 81015054 del 22 de noviembre de 2016, al haber tomado tiempos que no corresponden, lo que va en contra de la Estabilidad Financiera del Sistema General de pensiones, e impide que el sistema sea sostenible.

Sea lo primero señalar frente a la solicitud de medida cautelar invocada, que la parte actora - COLPENSIONES no dio cumplimiento en su integridad a lo establecido en el artículo 231 del C.P.A.C.A., norma en la cual se fijan los requisitos a efectos de proceder al decreto de dichas medidas; lo anterior, debido a que la entidad demandante únicamente en su escrito se basó en explicar la procedencia del decreto de medidas cautelares, la finalidad de las mismas y, el desarrollo normativo, omitiendo desarrollar e indicar cuales eran las razones que llevaron a atacar por vía de nulidad la legalidad de los actos administrativos censurados, es más tampoco desplegó una actuación propia que dejara claro de dónde devenían los valores presuntamente liquidados de más y, la diferencia que se solicita, pues en lo único que se soportó el escrito, fue en indicar que se habían incluido unos tiempos que no correspondían, sin demostrar de forma fehaciente, si estos influían o no en la cuantía de la pensión, pues entre otras al observar el contenido de todos los actos administrativos, estos se refieren a la aplicación de la Ley 33 de 1985 por encontrarse la demandada dentro del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, procediendo a la liquidación con el 75% de salarios devengados en los últimos 10 años, al dar aplicación a la sentencia de la Corte Constitucional.

De esta manera no es del todo claro cómo fue calculado el IBL (toda la vida laboral o, últimos diez años), que para dicha oportunidad se tasó en \$5.524.426, al que se le procedió a sacar el 75%, lo que arrojó un valor a reconocer por concepto de pensión de \$4.143.320, lo que debe ser objeto de análisis probatorio, para así determinar si existieron tiempos liquidados de más y si en alguna medida afectaron el IBL, pues tal y como lo reconoce la entidad en los actos demandados y, en el acto

administrativo de reconocimiento de pensión – Resolución Nª GNR35649 del 16 de febrero de 2015, la prestación fue reconocida con base en la Ley 33 de 1985, la que exige 20 años de servicio para dicho reconocimiento, procediendo a dar aplicación a la sentencia C-230 de 2015, en la que se indicó que la transición se refería a tiempo, edad y monto, mientras que frente al Ingreso Base de Liquidación, el que comprende el promedio de salarios o rentas frente a los que cotizó el empleado debe darse aplicación a la Ley 100 de 1993.

Es así que de la simple lectura de los textos jurídicos citados como base de la solicitud y el contenido de los actos administrativos acusados, no se puede llegar a concluir que el mismo no se ajusta a la legalidad, pues exige entrar a valorar el material probatorio arrimado al expediente, entre otras cosas, porque la entidad en su escrito no presenta de forma clara una liquidación en la que se indique en qué medida fue afectada la prestación al calcular unos tiempos que no corresponden y, si existe un incremento o no el IBL, para lo cual, será necesario para el Despacho recaudar todo el material probatorio y, entrar a valorar el mismos, a efectos de determinar si existen valores cancelados de más.

En consecuencia, los presupuestos antes enunciados requieren de una valoración de las pruebas aportadas con el curso del proceso, lo cual, es una actividad propia de la sentencia, además es allí cuando debe definirse, como producto del debate que necesariamente debe surgir entre las partes, la capacidad de las documentos aportados en la demanda para desvirtuar la legalidad de los actos acusados, es decir, como la ilegalidad no surge a simple vista, como es la naturaleza de la medida cautelar, no es dable predicar una violación flagrante, de bulto, o prima facie, razón por la cual, se resolverá en forma adversa la medida cautelar solicitada.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

91.

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de suspensión provisional de los efectos de la Resolución VPB32655 del 17 de agosto de 2016 y de la Resolución Nª SUB31002 del 5 de abril de 2017, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese por estado esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

catc

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICA A LAS PARTES
EN ESTADO ELECTRONICO No. 41, A TRAVES DE LA PAGINA
WEB WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY DE
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS 8:00 A.M.

16 OCT 2018


SECRETARIO